

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



APELACIÓN – SENTENCIA	
DEMANDANTES	- JOSEFINA y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO, en calidad de herederos determinados del señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO. - HEREDEROS INDETERMINADOS (vinculados por el Juzgado de 1ª. Instancia)
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y OTROS
RADICADO	05001-31-05-013-2021-00084-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes post-mortem y pago de retroactivo a herederos.
DECISIÓN	CONFIRMA

Medellín, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por los señores JOSEFINA y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO, en calidad de herederos determinados del señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO (QEPD) contra la sociedad la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, tramite al cual se vinculó a los herederos indeterminados del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 020**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día 27 de julio de 2022, e igualmente se conocerá del proceso bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de esta misma administradora pública de pensiones, en aquellos aspectos de la sentencia de primer grado que le hayan sido desfavorables y que no hubiesen sido objeto del recurso de alzada, conforme lo señalado en el art. 69 del CPTSS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El 15 de noviembre de 2017 falleció por causas de origen común la pensionada MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA; la citada señora era pensionada por vejez por parte del ISS, hoy COLPENSIONES, prestación que fue reconocida mediante resolución No 01811 del 15 de mayo de 1984, teniendo en cuenta un total de 597 semanas y una mesada pensional de \$9.261,00 a partir del 9 de noviembre de 1983; la señora LONDOÑO DE PANIAGUA, fruto de la relación que sostuvo con el señor MARTÍN EMILIO PANIAGUA DÁVILA, procreó a JOSEFINA, PEDRO PABLO y a LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, este último, nacido el 17 de octubre de 1952, quien, como consecuencia de un trauma encéfalo craneano, desde el año 1990 presentó una parálisis de sus extremidades derechas; el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, como consecuencia de su diagnóstico médico, nunca ejerció una profesión u oficio, por lo que nunca tuvo un trabajo estable que le permitiera satisfacer sus necesidades básicas, dependiendo en un todo y por todo de su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA, ya que el padre abandonó el hogar antes de su nacimiento; el referido señor falleció el 29 de noviembre de 2019, sin haber reclamado la sustitución pensional por la muerte de su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA, pues, como consecuencia de su diagnóstico médico, se venía adelantado proceso de adjudicación judicial de apoyo por parte de su hermana JOSEFINA PANIAGUA DE CAÑAS, en procura de adelantar el trámite administrativo ante la administradora de pensiones.

Señala el introductorio que, dadas las dificultades administrativas para obtener la calificación de pérdida de capacidad laboral de LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO por parte de COLPENSIONES, donde se encontraba pensionada la causante, luego de su fallecimiento fue solicitado a la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA se practicará con fundamentos en el historial clínico, valoración post mortem de pérdida de capacidad laboral del señor LUIS EDUARDO; que, como consecuencia de lo anterior, mediante dictamen de merma de capacidad laboral, con fecha de evaluación 2 de octubre de 2020, dicha facultad determinó que el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO padecía en vida una pérdida de capacidad laboral del 86.8% de origen común, estructurada el 21 de febrero de 1990; que el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, dada su condición de salud, nunca contrajo matrimonio ni sostuvo relaciones maritales de hecho con ninguna persona, así como tampoco, procreó hijos, y siempre convivió con su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA, desconociendo hasta la fecha el paradero de su señor padre; que, ante COLPENSIONES fue radicada reclamación administrativa, tendiente al reconocimiento de todas y cada una de las pretensiones objeto de esta acción judicial, quedando agotado el requisito consagrado en el artículo 6° del C.P.T y de la S.S.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que, en vida, el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO padecía una pérdida de capacidad laboral del 86.8%, originada por causas de origen común, con fecha de estructuración del 21 de febrero de 1990, de conformidad con el dictamen médico del 2 de octubre de 2020 proferido por la FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Se DECLARE POST MORTEM que al señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada como consecuencia del fallecimiento de su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO PANIAGUA, quien ostentaba la condición de pensionada en COLPENSIONES. Se DECLARE que los señores JOSEFINA y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO les asiste derecho a que le sean reconocidas las sumas

causadas en favor de su hermano LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO en consideración a ostentar la calidad herederos determinados.

Se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar a JOSEFINA PANIAGUA DE CAÑAS y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO, en calidad de herederos determinados del señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, el RETROACTIVO de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causado entre el 15 de noviembre de 2017, fecha del fallecimiento de la causante, y el 29 de noviembre de 2019, fecha del deceso del beneficiario, junto con las mesadas adicionales de cada anualidad. Se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar los INTERESES MORATORIOS consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 causados por la mora en el reconocimiento prestacional o en subsidio la INDEXACIÓN de las condenas. Se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su vocera judicial; frente a los hechos, reconoció la calidad de pensionada de la causante, su fallecimiento, el deceso del señor Luis Eduardo Paniagua Londoño, la existencia del dictamen pericial referido en la demanda, y el agotamiento de la reclamación administrativa, indicando, frente a los demás hechos, que no le constan.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; BUENA FE; y la EXCEPCIÓN INNOMINADA”*.

Mediante auto de fecha 19 de agosto de 2021, el juzgado de conocimiento, ante la inexistencia de proceso sucesorio por la muerte del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño, dispuso la integración del contradictorio por activa con los herederos indeterminados del referido señor, ordenando su representación por medio de curador ad litem y su emplazamiento.

El señor Curador ad litem dio respuesta a la demanda; frente a los hechos, acepta aquellos que están acreditados mediante prueba documental, indicando que no le constan los demás supuestos fácticos. No se opone a las pretensiones, siempre y cuando se acrediten los derechos, del señor Paniagua Londoño a la sustitución pensional, y de los demandantes a recibir el retroactivo, indicando que no se deben reconocer los intereses moratorios solicitados sino la indexación.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, la juez a-quo en audiencia pública celebrada el día 27 de julio de 2022, DECLARÓ que el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO ostentó la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO.

CONDENÓ a COLPENSIONES a pagar a los señores JOSEFINA PANIAGUA DE CAÑAS y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO la suma de \$22.685.948, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 15 de noviembre de 2017 y el 29 de noviembre del año 2019, en calidad de herederos determinados del señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO. CONDENÓ a COLPENSIONES, a pagar a los señores JOSEFINA PANIAGUA DE CAÑAS y PEDRO PABLO PANIAGUA LONDOÑO la indexación del retroactivo indicado.

AUTORIZÓ a COLPENSIONES, a efectuar los descuentos respectivos y retroactivos con destino al sistema de seguridad social en salud. ABSOLVIÓ a la COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas en su contra, e impuso COSTAS a cargo de la demandada fijando las correspondientes agencias en derecho.

Como fundamento de su decisión, la juez de primer grado comenzó por indicar los hechos acreditados con la prueba documental allegada, esto es, el fallecimiento de la señora María Mercedes Londoño de Paniagua el 15 de noviembre del año 2017 conforme el registro civil de defunción, que mediante la Resolución 1811 del 15 de mayo de 1984, se reconoció la señora María Mercedes Londoño de Paniagua pensión de vejez, la calidad de hijos de la

citada señora, tanto de los demandantes, como de Luís Eduardo Paniagua Londoño, así como el parentesco de hermanos de los demandantes con este último, de acuerdo a sus respectivos registros civiles de nacimiento, el fallecimiento del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño el 29 de noviembre del año 2019, conforme a su registro de defunción; hace mención de la página 71 del PDP2, que da cuenta que la señora María Mercedes Londoño, al solicitar su pensión de vejez, indicó a la entidad de Seguridad Social en su momento como beneficiario al entonces joven Luis Eduardo Paniagua Londoño, igualmente, que en septiembre del año 2002 se afilia al citado señor como beneficiario de salud de la señora María Mercedes Londoño (página 40 del PDF3).

Ya de cara al problema jurídico principal, esto es, si es establecer si es posible o no una declaratoria póstuma del estado de invalidez para considerarlo beneficiario de una pensión de sobrevivientes, sobre el estado de invalidez del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño para la fecha de fallecimiento de la pensionada María Mercedes Londoño de Paniagua, trae a colación lo registrado en la historia clínica de éste, resaltando el accidente que sufrió en los años 90, que imposibilitó su movilidad y le causó una lesión craneoencefálica, el hecho de que en ese largo historial aludido también puede verse que vivía con su madre y con sus hermanos, que tenía también retardo mental moderado llamando la atención que, para 2017, tenía dificultades de movilidad, la depresión, la dependencia total y absoluta para sus necesidades básicas, incluso el diagnóstico de EPOC sin ser oxígeno dependiente, secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares, e insomnio. Señaló que, con la demanda, se allegó un dictamen pericial con el fin de determinar cuál era la situación de salud del señor Luis Eduardo Paniagua Londoño, experticia que la falladora considera que es conducente y pertinente para orientar el convencimiento judicial porque cumple con todas las formalidades del artículo 227 del Código General del Proceso, se anexó la documental que exige también el artículo 226 del Código General del Proceso, y se corrió traslado de ese dictamen pericial, pronunciándose Colpensiones en el sentido que la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia no se encontraba facultada para expedir ese tipo de valoraciones, argumento que la a quo no comparte porque es absolutamente contrario al mandato de decreto 1352 del año 2013, artículo 4 parágrafo 3, en el cual se habilita específicamente a las universidades para

rendir dictámenes periciales en el marco de ese tipo de procesos donde es relevante la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.

De dicho dictamen pericial, resalta que la valoración del estado de salud de Luis Eduardo Paniagua Londoño fue realizada el día 2 de octubre del 2020, de manera póstuma, que su insumo principal fue la historia clínica del paciente, y que se calificó una merma de capacidad laboral de 86,8%, con fecha de estructuración de 21 de febrero de 1990, de origen común. Destaca de esa valoración su coherencia y su estricto análisis de la historia clínica visible en el plenario. Indica, además, que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, tiene una línea jurisprudencial clara y coherente, indicando que, si bien es cierto los dictámenes de pérdida a capacidad laboral son una herramienta de apoyo al juzgador, para definir asuntos de tipo técnico, el funcionario judicial siempre mantiene la facultad de realizar una valoración probatoria conjunta, bajo las reglas de la zona crítica, pues en este tipo de asuntos, no hay tarifa legal probatoria (Sentencia SL 1578 del año 2022). Que, para el despacho, el dictamen judicial de parte aportado merece toda la credibilidad, resaltando la seriedad, la claridad y el rigor técnico del mismo.

Resalta, además, el documento visible a folio 63 del PDF12, en el que el Instituto de Seguros Sociales en la Regional Antioquia, oficina de Medicina Laboral, expidió una a comunicación del 28 de octubre del año 1983 en la cual exponía que el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño tenía para la época un retardo mental severo, y que, según esa oficina, en su momento, lo convertía en inválido.

Concluye este punto indicando que el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño sí tenía una situación de invalidez, incluso con porcentaje de merma de capacidad laboral muy relevante, de 86,800 con fecha de estructuración, el 21 de febrero de 1990, encontrándose acreditado que el citado señor ostentaba el status de inválido para la fecha de la muerte de su madre, la señora María Mercedes Londoño, 15 de noviembre del año 2017. Indica la a quo que no comparte la postura de la demandada sobre la inconducencia del dictamen pericial de parte, pues los argumentos planteados por la apoderada de Colpensiones desconocen algunos principios fundantes del derecho a la seguridad social, como lo son la irrenunciabilidad del derecho y como lo es la

situación especial de las personas que tienen un estado de debilidad manifiesta, situación que en este caso se presentó respecto al señor Luis Eduardo Paniagua Londoño. Señala que, por múltiples situaciones en vida del señor en mención, no se realizaron las reclamaciones pertinentes, pero que esto no obsta para resaltar en este caso la prevalencia que tienen estos principios.

En cuanto al requisito de la dependencia, que junto al de estado de invalidez trae el artículo 13 de la Ley 797/03 convivencia, indica el despacho que, del análisis de la prueba testimonial, sí se orienta el convencimiento judicial respecto del cumplimiento de este requisito. Señala que la señora Luz Elena Restrepo Londoño, Julián de Jesús Bedoya González y William de Jesús Bedoya González, tienen conocimiento directo de los hechos y, como factores comunes indican que la situación de salud del señor Luis Eduardo Paniagua Londoño era muy notoria, así como, su imposibilidad para realizar trabajos, actividades económicas productivas o para la consecución de bienes u otro tipo de ingresos que le generara autosuficiencia económica; que dan cuenta que, el citado señor, por su situación de discapacidad tan relevante en el tiempo, habitaba con su grupo familiar conformado en su momento por su señora madre, María Mercedes Londoño, quien indicaron era pensionada, y en algún momento también por la señora Josefina Paniagua del Campo. Resalta que son claros los testigos que su señora madre era quien principalmente asumía el cuidado del señor Luis Eduardo, vivía con él, evidentemente ejerciendo sus obligaciones impuestas en el artículo 42 de la Constitución. Que también el señor William fue muy claro en su testimonio en advertir que la señora también recibía ayuda para estos menesteres de su hija, la señora Josefina Paniagua de Cañas y que la ayuda de ésta se enmarcaba en diferentes escenarios, entre otros, de suministro de alimentos, de cuidados básicos, el baño, etcétera; que ese apoyo de la señora Josefina Paniagua de Cañas no es extraño porque, evidentemente, la señora Josefina es hija de la señora María Mercedes y es completamente coherente en el rol de la solidaridad familiar, lo que, en el contexto de la línea jurisprudencial imperante, tales ayudas de otras personas, no desvirtúan la noción de dependencia económica.

Indica, además, que, en el proceso, el análisis de la prueba testimonial y documental da cuenta que la señora María Mercedes Londoño realizó actos coherentes ante el Instituto de Seguros Sociales de cara a ingresar a su hijo,

Luis Eduardo Paniagua Londoño como su beneficiario, situación que fue aceptada por la misma entidad

Que, así las cosas, está plenamente demostrado que el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño cumplió todos los requisitos legales y jurisprudenciales para ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes por la muerte de su madre María Mercedes Londoño.

Adujo, además que, ante el fallecimiento del señor Luís Eduardo, son sus herederos, quienes acreditaron tal calidad, los que tienen legitimación por activa para solicitar ante Colpensiones el pago de las mesadas pensionales que se hubieran causado desde el momento de la muerte de la señora María Mercedes Londoño hasta el momento de la muerte del citado señor, por lo que pueden reclamar el retroactivo pensional causado. Que, sumado a ello, el despacho ordenó el emplazamiento de los herederos indeterminados del señor Luis Eduardo Paniagua Londoño, cumpliendo los requisitos de la normatividad procesal realizando el emplazamiento del Registro Nacional de Personas Emplazadas, como se visualiza en el PDF 29 y nombró a un curador para que velara por sus intereses de quien pudiera tener algún eventual interés a reclamar esta prestación sin generarse un reclamo concreto de ninguna persona distinta a los demandantes, precisando que es procedente en este caso el pago directo a los herederos demandantes de las mesadas causadas y no cobradas por el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño, quien sí ostentó la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, porque está demostrado claramente con la prueba su rol de herederos determinados.

VI. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

La apoderada judicial de COLPENSIONES solicita que se revoque la sentencia de primer grado aduciendo que, si bien la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia está facultada para realizar este tipo de pronunciamientos (Calificación de pérdida de capacidad labora), lo cierto es que la norma le ha otorgado a la entidad que representa la primera oportunidad para realizar la calificación y que, en este caso, esa oportunidad no se presentó porque la parte actora no realizó de manera oportuna la solicitud de calificación

ante la entidad, para poder entrar a determinar si debe reconocer sumas de dinero a favor de las personas que lo solicitan. Que esto atenta directamente contra la sostenibilidad financiera del sistema, máxime, si se tiene en cuenta que en esta oportunidad se está condenando a la entidad a reconocer unas sumas de dinero determinadas en la sentencia, contentivas del retroactivo, la indexación y las costas, lo que afecta esta sostenibilidad financiera del sistema teniendo en cuenta que esta sostenibilidad busca orientar a las ramas y a los órganos del poder público dentro de sus competencias en un marco de colaboración armónica.

Que, en ese orden de ideas, es necesario que le dé prevalencia al interés general sobre el particular y se tomen medidas pertinentes en busca precisamente de la protección de los recursos que soporta el sistema pensional, manifestando vehementemente que no se hizo de manera oportuna esta reclamación a la entidad, durante el momento en el que Colpensiones pudo haber realizado la calificación.

Señala que otro punto para tener en cuenta es con relación a la dependencia económica; que, si bien en la sentencia la señora juez fundamenta que sí existió esa dependencia con relación del señor Luis Eduardo y su señora madre María Mercedes, indica que se aparta de manera muy respetuosa de esta consideración, si se tiene en cuenta que es claro, como ella lo ha manifestado, que no necesita una dependencia total y absoluta, tal dependencia significa que el beneficiario de la pensión no requiere demostrar esa carencia absoluta de recursos, sino que simplemente demostrar que con lo que obtiene no le alcanza para llevar una vida en las mismas condiciones que tenía en vía del causante, así como ella lo manifestó en la línea jurisprudencial en la motivación de la sentencia; pero que, como se puede observar en el proceso, no existió ninguna clase de desmejora en las condiciones de vida del señor Luis Eduardo, porque quien siempre se ha hecho cargo de su subsistencia es la señora Josefina, tal como lo manifestó el señor William cuando rindió su interrogatorio; que él textualmente a la pregunta que le realizó la apoderada de los demandantes sobre quién era que costaba los gastos del señor Luis Eduardo, contestó que quien pagaba todo era la señora Josefina: que por lo tanto, no existió desmejora de las condiciones de vida del señor Luis Eduardo con la muerte de su madre, pues, reitera, quien siempre estuvo al frente de sus

cuidado, no solamente los que manifestó la señora juez en el cuidado de alimentación, vivienda y demás, sino también lo económico, fue la señora Josefina, por lo que, concluye, no se puede predicar que existió dependencia económica del señor Luis Eduardo con la señora María Mercedes.

En cuanto a la indexación ordenada en la sentencia, las condenas y con relación a la indexación para manifestar que se ha condenado conforme a una sentencia reciente, más sin embargo es importante aclarar que conforme la normatividad las mesadas que se reconocen ya tienen incluida este componente de indexación porque se van actualizando cada año entonces solicito que también se absuelva en ese sentido.

Alegatos de conclusión

En su debida oportunidad, la apoderada de la demandada presentó sus alegaciones de conclusión reiterando lo dicho al interponer el recurso de apelación. Aduce que se equivoca la falladora de primera instancia al considerar erróneamente que el señor LUIS EDUARDO PANIGUA LONDOÑO ostentaba la calidad de hijo inválido o discapacitado, toda vez que para arribar a esta conclusión se basó en el Dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, realizado el 02/10/2020 (posterior a la muerte del señor LUIS EDUARDO), y en él se determina una pérdida de capacidad laboral del 86.8% con una fecha de estructuración del 21/02/1990, dictamen que considera jurídicamente inviable, ya que no cumple con lo estipulado por el Sistema General de Seguridad Social en Colombia; estima que COLPENSIONES es la única entidad competente y facultada para emitir dictámenes de pérdida de capacidad laboral en primera oportunidad para sus afiliados, oportunidad que nunca se otorgó a la Entidad, por negligencia de los demandantes, ya que entre la muerte de la señora MARIA MERCEDES y la muerte del señor LUIS EDUARDO, hubo un considerable lapso dentro del cual se hubiese podido intentar realizar este trámite. Señala que, normativamente, el Decreto 1507 de 2014 es el vigente para emitir dictámenes de calificación en primera oportunidad; que el Decreto 917 de 1999 fue derogado y es el que erróneamente se está aplicando para el caso del señor LUIS EDUARDO.

Resalta, además, que, según el Decreto 1507 de 2014 (que como ya se indicó es el vigente para realizar la calificación) al estar la persona fallecida no es procedente emitir el mismo por cuanto no se puede determinar las actividades de la vida diaria y las deficiencias, ya que éstas deben realizarse con pruebas actualizadas y conceptos médicos de los especialistas tratantes; que este dictamen referencia pruebas desde febrero de 1990 que, a su juicio, no determinan con certeza cuál es la condición del funcionamiento para el año de la calificación (es decir 2020); que, cuando se emite un dictamen, se califican son las secuelas funcionales que persisten al finalizar los tratamientos ofrecidos que, con base en las valoraciones de los especialistas tratantes obrantes en el expediente, como prueba principal (la historia clínica del paciente es el soporte de la calificación), no se califican síntomas en sí, ni tratamientos ofrecidos, ni incapacidades; sino que se califican “secuelas funcionales” que persisten al finalizar los respectivos tratamientos médicos.

Que también se equivocó la falladora al reconocer esta prestación de sobrevivencia, la cual, según la Honorable Corte Constitucional (en sentencia tales como la C-515/2019 y la C-336/2014) se orienta por 3 principios: Estabilidad económica y social para los allegados del causante; reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus beneficiarios; prevalencia del criterio material para analizar el requisito de convivencia; que, en este caso el primer principio, de estabilidad económica y social para los allegados del causante, no logra demostrarse en esta oportunidad, trayendo a colación lo dicho por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia SL-47676/2014 sobre la dependencia económica, indicando la recurrente que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes debe contar cuando menos con los siguientes elementos: 1. Debe ser cierta y no presunta; esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario. 2. La participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario. 3. Las contribuciones que figuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste.

Que, con base en lo anterior, NO se logró probar en el proceso la dependencia económica del señor LUIS EDUARDO para con su señora madre MARIA MERCEDES, por la simple y llana razón de que, quien siempre se ha hecho cargo de TODOS sus gastos, ha sido la señora JOSEFINA (hecho confirmado por uno de los testigos en la prueba testimonial), por lo que no hubo desmejora en las condiciones de vida del señor LUIS EDUARDO luego de la muerte de su madre MARIA MERCEDES, estimando que, por esta razón, nunca se vio la necesidad de iniciar ningún tipo de trámite (administrativo o judicial) para obtener lo que se reclama en esta oportunidad, mucho tiempo después del fallecimiento del mismo LUIS EDUARDO. Que es claro que esto ocurrió porque la señora JOSEFINA siempre estuvo al pendiente del señor LUIS EDUARDO cubriendo todas las necesidades de éste (tal como se puede corroborar reitero con la prueba testimonial practicada).

Para finalizar, resalta que esa oportunidad brindada por la norma, para que la Entidad en primera oportunidad realice la calificación de pérdida de capacidad laboral, busca proteger precisamente el principio constitucional de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional trayendo a colación el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, así como también, el artículo 334 de la Constitución Política,

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia emitida por la Juez 013 Laboral del Circuito de Medellín, el pasado 27 de julio de 2022 y a su vez se ABSUELVA a su representada de todas y cada una de las condenas en su contra.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Sustitución pensional post mortem, retroactivo pensional en favor de sus herederos.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da

mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, teniendo en cuenta los aspectos de la sentencia controvertidos en el recurso de apelación, y que se conoce el asunto en consulta a favor de Colpensiones, la problemática que ha de resolver la Sala, consiste en determinar: (i) si el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO (q.e.p.d.) acredita los requisitos legales para ser considerado beneficiario de la sustitución pensional causada con el fallecimiento de su señora madre MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA, esto es, su condición de inválido y su dependencia económica con relación a la causante. De ser así, (ii) se establecerá la fecha de disfrute pensional y el valor del retroactivo adeudado, y (iii) si los demandantes, en condición de herederos determinados del señor Luis Eduardo Paniagua Londoño están legitimados para recibir dicho retroactivo.

Como hechos indiscutidos en esta instancia se tiene que la señora MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA recibió una pensión vejez, por parte del ISS, mediante la Resolución No. 01811 del 15 de mayo de 1984 (fls.19 y 20 PDF 3), y también, que la citada señora falleció el 15 de noviembre de 2017, como se observa en el certificado de defunción obrante a folio 17 del PDF 3.

Ahora, procede la Sala a resolver lo pertinente dentro de su competencia, advirtiendo que para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son las contenidas en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, que indican

“Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

*Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:*

*1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y
(...)”*

Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

(....)

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993

(...)”.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral.

Dicha normativa le exige entonces al hijo del causante, para acceder a la sustitución pensional, el requisito objetivo de la condición de inválido en cabeza del beneficiario con fecha de estructuración anterior al fallecimiento del o la causante, y el subjetivo de la dependencia económica.

Pero además de esos requisitos, el presupuesto esencial para que entren a analizarse los otros requisitos, lo constituye la prueba de la filiación entre el hijo inválido y, en este caso, la madre causante.

Con relación a este último requisito, a folio 28 del mismo PDF obra el registro civil de nacimiento del señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, que da cuenta que el mencionado nació el 17 de octubre de 1952, y es hijo de la señora MARIA MERCEDES LONDOÑO DE PANIAGUA. Así las cosas, no cabe ninguna duda que el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño era hijo de la causante María Mercedes Londoño de Paniagua.

Ahora, ante el fallecimiento de éste el 29 de noviembre de 2019 (Certificado de defunción visible a folio 30 del PDF 3), los demandantes, hermanos del señor Luís Eduardo, en calidad de herederos (Artículo 1047 del C.C.), que acreditan con sus respectivos registros civiles de nacimiento (Fol. 22 a 26 del PDF referido), razón por la cual tienen legitimación en la causa para

impetrar esta acción, deprecian la sustitución pensional post mortem, con relación al señor Luís Eduardo, por lo cual resulta pertinente entrar a revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad aplicable al caso, teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento de la causante, en aras de determinar si le asiste derecho a percibir la sustitución pensional a causa del fallecimiento de su señora madre.

En cuanto al requisito atinente a la condición de inválido (a) del hijo(a) del pensionado(a) o afiliado(a) fallecido(a), cabe indicar que el artículo 38 de la ley 100 de 1993 establece que se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Y el artículo 14 del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, estableció que *“el estado de invalidez del beneficiario de una pensión de sobreviviente se califica de conformidad con lo previsto en el Decreto 1346 de 1994 y las normas que lo aclaren o lo modifiquen”*. En la actualidad rige el Decreto 1352 de 2013, el cual sigue dando competencia para establecer el estado de invalidez, en primera instancia a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y, en segunda instancia a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, previa la valoración que en primer término realice el Fondo de pensiones en el que esté afiliado él o la causante, y en caso de controversia frente a este último.

No obstante, **en sede judicial**, este procedimiento no corresponde a un trámite administrativo previo que necesariamente deba agotarse para que se reconozca, la pensión de invalidez, o, en este caso, la de sobrevivientes para hijo inválido, puesto que la parte interesada en la valoración médica también puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, como resalta la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL1044 de 2019, citando varias sentencias en tal sentido.

Se indicó en la sentencia SL 1044 lo siguiente:

“Pues bien, la Sala de manera reiterada y pacífica ha adoctrinado (CSJ SL 11910, 29 sep. 1999; CSJ SL 14472, 27 feb. 2001, CSJ SL 15904, 1.º ago. 2001 y CSJ SL 17187, 27 nov. 2001) que si bien la gestión que se realiza ante las juntas de calificación de invalidez, conforme a los artículos 41, 42 y 43 originales de la Ley 100 de 1993, reglamentados por el Decreto 2463 de 2001 vigente en la época que atañe al sub lite, tiene por finalidad establecer el estado de invalidez mediante un procedimiento específico, este no corresponde a un trámite administrativo previo que necesariamente

deba agotarse para que se reconozca la pensión de invalidez, puesto que la parte interesada en la valoración médica también puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Precisamente, en la primera de las sentencias referidas, la Corte explicó:

“Los artículos 41, 42 y 43 de la ley (sic) 100 de 1993 no manejan el tema del reconocimiento de la pensión de invalidez como presupuesto procesal (...).

Nada indica entonces en esos tres preceptos la intención siquiera tácita de crear un procedimiento, gubernativo o de otra naturaleza, previo al juicio y ante entes privados. Pero aún suponiendo que lo hubiera pretendido, operaría por fuerza la excepción de inconstitucionalidad y la consiguiente inaplicación de esa preceptiva por ser contraria al esquema constitucional que sitúa en el órgano jurisdiccional la facultad del Estado para la definición de los conflictos y el del reconocimiento de una pensión es uno de ellos.

En esas condiciones, la Sala estima, en acuerdo con el recurrente, que el adecuado entendimiento de los artículos 41, 42 y 43 de la ley (sic) 100 de 1993 es crear una opción conforme a la cual si el asegurador niega el reconocimiento de la pensión de invalidez, el asegurado puede acudir a las juntas de calificación de invalidez o al juez del trabajo, a su elección, pues también se puede acudir a ellas una vez iniciado el trámite judicial, para darle al dictamen pertinente el trámite que le corresponde en su calidad de prueba.”.

Adicionalmente, es pertinente señalar que, incluso, las valoraciones que se puedan emitir durante el trámite administrativo, son controvertibles ante la Jurisdicción del Trabajo y la Seguridad social, por lo que los dictámenes que profieren las entidades del sistema de seguridad social no son medios probatorios solemnes, y, por ende, el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y la SS, en la medida en que la pérdida de la capacidad laboral y su origen **pueden ser demostradas a través de los demás medios de prueba**, que no exclusivamente con dicha probanza, así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede apreciarse en las sentencias con radicación 26591 de 4 de abril de 2006, SL500-2013 SL9184-2016, SL3992-2019, SL4571-2019, y más recientemente la sentencia SL727-2021 del 22 de febrero de 2021, con radicación 77.899, en esta última se indicó lo siguiente:

“Lo anterior significó, dentro de la evolución de la jurisprudencia, que a pesar de la importancia y tecnicidad de la evaluación que realizan las autoridades médico laborales y las juntas de calificación de invalidez, tanto regionales como

nacionales, estas pueden ser objeto de discusión en el proceso de seguridad social, al existir otros medios probatorios que ofrezcan un mayor grado de persuasión al juzgador, en punto del grado o porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la invalidez y su origen, lo cual debe estar enmarcado en las reglas de apreciación probatoria del artículo 61 del CPTSS.”

Ahora, cabe precisar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-080 de 2021, indicó que, si bien en principio la determinación de la invalidez depende del dictamen que se expida por las autoridades habilitadas conforme a la Ley 100 de 1993, *“...en ciertas hipótesis excepcionales, con miras a salvaguardar derechos fundamentales y dada la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, cabe exigir tener en cuenta otros medios probatorios idóneos distintos, siempre que contengan la información necesaria y suficiente para acreditar tal estado. Lo anterior, sobre todo cuando de por medio se halla un sujeto de especial protección constitucional. De esta manera, y así lo avalado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, no puede dejarse de lado y restarse valor a los dictámenes expedido por una entidad oficial como el Instituto Nacional de Medicina Legal o una sentencia judicial que declare la interdicción de una persona, pues ellas constituyen pruebas de la incapacidad e invalidez de una persona, especialmente cuando tiene problemas congénitos.”*

En ese orden de ideas, no es requisito sine qua non que, con anterioridad a la presentación de la demanda, la persona por quien se solicita la sustitución pensional en calidad de hijo inválido, haya agotado el trámite ante Colpensiones o fondo de pensiones con miras a establecer su condición de inválido, criterio del alto tribunal en mención que acoge la colegiatura, máxime cuando las valoraciones realizadas en dicho trámite no constituyen prueba solemne para acreditar la condición de invalidez en el proceso laboral, teniendo en cuenta, además, que, en el caso bajo examine, el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño era sujeto de especial protección constitucional desde mucho antes de la fecha en que falleció su señora madre, como se verá ´más adelante, hasta su propio fallecimiento, sin que pueda imputársele a él negligencia alguna por no acudir ante el fondo de pensiones a fin de realizar el trámite administrativo tendiente a establecer su estado de invalidez en vida de su señora madre, menos aún, pretender enervar su eventual derecho a la

sustitución pensional por no haberlo hecho con posterioridad a esa data y antes de su propia muerte, por lo que no es de recibo lo aducido por la censura en el sentido de exigir en este caso el agotamiento del trámite administrativo en comento.

Resalta la sala que el requisito que debe acreditarse en el proceso es la condición de inválido del hijo para la fecha de fallecimiento del padre o madre, es decir, que la fecha de estructuración de la invalidez fue con anterioridad al fallecimiento del o la causante, sin que sea admisible la exigencia de otros requisitos que no contempla el literal c del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Ahora, la parte demandante allegó con el libelo introductorio Dictamen Pericial visible folios 34 a 39 del PDF 3, que, para mayor ilustración, indica:

		DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		F-03-0030
				VERSIÓN 01
Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratorio.saludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia				PÁGINA 1 DE 6

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL DICTAMEN				
El presente dictamen se realiza con base en la copia de la historia clínica y/o expediente del afectado, debido a que el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional De Salud Pública de la Universidad de Antioquia, ha suspendido la atención al público ante la coyuntura de la pandemia por la COVID-19. Hasta que las autoridades sanitarias levanten las medidas, el dictamen se realiza con evidencia documental y la aceptación de las personas solicitantes de este servicio bajo esta condición.				
Fecha de Evaluación	Remitente		Radicado	
2/10/2020	Josefina Paniagua de Cañas, cédula 32.496.273			
Nombre Médico Evaluador	Martha Lucia Escobar Pérez	Ciudad/País de Calificación	Medellín/ Colombia	
MOTIVO DE CALIFICACIÓN				
Determinación PCL y Ocupacional	X	Determinación Origen	X	Fecha de Estructuración
				X

2. DATOS DEL CALIFICADO									
Apellidos		PANIAGUA LONDOÑO			Nombres		LUIS EDUARDO		
Documento de identidad:		No. Cédula		70.048.199		No. Tarjeta de identidad			
No. Cédula Extranjería		Otro: (¿Cuál?)							
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:				EDAD		Género	
DÍA	MES	AÑO	Medellín, Antioquia				67		Femenino
17	10	1952							Masculino
Estado Civil:		Casado(a)		Soltero(a)	X	Viudo(a)		Separado(a)	
Escolaridad									
Analfabeta		Primaria		Secundaria		Técnico/ Tecnólogo		Universitario	
								Posgrado	
Hijos		Ejemplo: Femenino: 3 Edad: 12-13-20/ Masculino: 1 Edad: 8		EPS		AFP		ARL	
Femenino	Edad	Edad	Edad	Nueva					
Dirección Residencia		Calle 18 # 74-23				Municipio		Estrato	
						Medellín		3	
Teléfonos:		Celular:	3166956400		Fijos:	5822540			
Ocupación Habitual						Ocupación Actual			

3. DATOS TOMADOS DEL EXPEDIENTE		
Fecha	Folio	Resultados

4. DATOS TOMADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA O PRUEBAS DIAGNÓSTICAS		
Fecha	Médico firmante y/o entidad que reporta	Resultados
	Instituto de seguros sociales	Lo atropelló un carro, trauma craneoencefálico
		12/02 consciente y orientado a ratos, miembros inferiores rígidos.

Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA <small>1955</small>	DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		F-03-0030
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 • Apartado: 1226 • Nte. 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratorio.salud publica@udea.edu.co Medellín, Colombia		VERSIÓN 01
			PÁGINA 2 DE 6

		inmovilizado,
05/02/1990	Policlínica adultos	TAC Cerebral Simple. - No se demuestra lesión parenquimatosa compatible con proceso infeccioso, tumoral o isquémico - No hay colecciones intra ni extracerebrales - El sistema ventricular en normal - La fosa posterior esta conservada - No hay calcificaciones patológicas TAC cerebral sin hallazgos patológicos Olga Arango. radióloga
15/02/1990	Instituto de seguros sociales	Paciente pálido, mama dice que hace 15 días lo atropello un carro, parálisis hemicuerpo derecho.
21/02/1990	Instituto de seguros sociales	Electroencefalograma - El registro basal con ojos abiertos esta lentificado en forma difusa y permanente por ondas de 2-4hz con amplitud media de 70 microvoltios con predominio bifrontal. En menos proporción se encuentran ondas de 5-7hz difusas. Hay continuos artefactos por movimientos diversos - No hubo colaboración para la hiperpnea - No se registran respuestas a la foto estimulación y apertura cierre de los ojos EEG severamente anormal, por letificación delta cortical difusa permanente sin zonas de diferenciación. Camilo José Borrego. Medico
30/04/1993	Amigos de los limitados	Certifican que el usuario está en la institución hace 3 años, presenta limitación física y posee silla de ruedas. Maritza Posada. Promotora social
26/10/01	Seguro Social	Desde hace 10 años en silla de ruedas por accidente de transito desde hace un año y medio absceso en glúteo izquierdo que no mejora con tratamiento ahora con dolor Firma no legible, medico cirugía general
09/2002	Seguro Social	Afilación a la seguridad social como pensionado.
4/07/2003	Seguro Social	47 años, 12 en silla de ruedas con absceso glúteo izquierdo que no responde a tratamiento.
16/03/2009	Las Américas Torre Medica	Desde hace 8 años fistulas anales que requirieron cirugía hace 4 años, a pesar de lo cual continua con drenaje activo y secreción purulenta. Antecedente: paraplejia por accidente automovilístico hace 14 años Diagnostico: quiste pilonidal complejo Juan Ricardo Marques. Cirujano coloproctología
11/05/2009	Nueva EPS	Antecedente de retardo mental moderado, secuelas hemiplejia derecha por trauma craneoencefálico severo. Ana Ximena Mosquera Medicina general


Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
 Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		F-03-0030
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratorio.saludpublica@udea.edu.co Medellin, Colombia		VERSIÓN 01
			PÁGINA 3 DE 6

8/01/2011	Biosigno	Retardo mental moderado, secuelas de TEC, depresión. Dependiente para su autocuidado. Monoparesia superior derecha, pie equino derecho, usa silla de ruedas no deambula por sus medios. José Gabriel Jiménez, médico domiciliario.
25/05/2012	Nueva EPS	Paciente en silla de ruedas por secuelas de hemiplejia derecha retardo mental moderado y trauma craneoencefálico severo. Se autoriza consulta domiciliaria por su discapacidad. 2736 Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad Jairo Bravo. Cirujano General
13/06/2012	Clínica Las Américas	Antecedentes de TEC severo 1985 + secuelas, retardo mental moderado y depresión Leire Melet Gómez. Medico y Cirujano
6/06/2013	Clínica Las Américas	Control domiciliario: Secuelas de TEC severo, hemiplejia derecha, trastorno depresivo.
18/10/2013	Clínica Las Américas	Consulta por diagnósticos de Tabaquismo pesado Secuelas TEC Trastorno depresivo Firma no legible del Medico
13/12/2017	IPS Universitaria Universidad de Antioquia	Se atiende en domicilio por diagnósticos de - Secuelas de TEC severo por accidente de tránsito hace 30 años - EPOC no oxigeno dependiente - Retardo mental leve Paciente frágil, dependencia de cuidador. Jhony Enrique Sarmiento Barboza. Medicina especializada
29/11/2019	Registraduría del Estado Civil	Registro de defunción de Luis Eduardo Paniagua Londoño, cédula 70.048.199.
Sin fecha	Nueva EPS	Escala de Karnofsky en 20 que se interpreta: Encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización y tratamiento activo. Esta escala permite conocer la capacidad que tiene el paciente para las actividades de la vida cotidiana.

5. DIAGNÓSTICOS MOTIVO DE LA CALIFICACIÓN		
No.	CÓDIGO CIE-10	Descripción
1	G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA (Compromiso en la movilidad de extremidades superior e inferior derechas)
2	F068	OTROS TRASTORNOS MENTALES ESPECIFICADOS DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA
3	F331	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE

Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

	DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-03-0030
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratoriosaludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia	VERSIÓN 01
		PÁGINA 4 DE 6

TÍTULO PRIMERO. VALORACIÓN DEFICIENCIAS												
DEFICIENCIAS												
Clase funcional / valor porcentual												
No.	Nombre de la deficiencia	No. Tabla	Clase	CFP	CFM1	CFM2	CFM3	Valor Ajuste	Clase Final y literal	CAT	Dominancia	*Ajuste total de deficiencia (sin ponderar)
1	Perdida movilidad una extremidad superior	12.2	3									50.0%
2	Trastorno de una extremidad inferior	12.3	3									35.0%
3	Depresión (trastorno eje I)	13.2	I									20.0%
4	Retardo mental (trastorno eje II)	13.6	II									40.0%

***Fórmula ajuste total de deficiencia: (CM1-CFP) + (CM2-CFP) + (CM3-CFP)**
CFP: Clase factor principal CFM1: Clase factor modulador 1 CFM2: Clase factor modulador 2 CFM3: Clase factor modulador 3

DEFICIENCIA COMBINADA = $A + \frac{(100-A)*B}{100}$	84.4%
VALOR TOTAL DE DEFICIENCIA = Valor deficiencia combinada * 0.5	42.2%

TÍTULO SEGUNDO. VALORACIÓN DEL ROL LABORAL, ROL OCUPACIONAL Y OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES															
CAPITULO II: ROL LABORAL															
No. TABLA								CATEGORÍA			% MAXIMO ASIGNADO				
TABLA 1.	Clasificación restricción rol laboral							1	2	3	4	5	6	X	25.0%
TABLA 2.	Clasificación de las restricciones en función de la autosuficiencia económica							1	2	3	4	5	X		2.5%
TABLA 3.	Clasificación de las restricciones en función de la edad cronológica							1	2	3	4	5	6	X	2.5%
														(%) PORCENTAJE TOTAL ROL LABORAL	30.0%

CAPITULO III: OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES														
Asigne el valor según grado de dificultad, ayuda y dependencia: 0.0: No hay dificultad, no dependencia / 0.1 Dificultad leve no dependencia / 0.2 Dificultad moderada-dependencia moderada / 0.3 Dificultad severa-dependencia severa / 0.4 Dificultad severa-dependencia severa														
COD	ÁREA OCUPACIONAL	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	TOTAL		
d1	Tabla 6 Aprendizaje y aplicación del conocimiento			0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	1.9		
d3	Tabla 7 Comunicación	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	TOTAL		
					0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	2.0		
d4	Tabla 8 Movilidad	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	TOTAL		
		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	3.7		
d5	Tabla 9 Auto cuidado-cuidado personal	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	TOTAL		
		0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	3.4		
d6	Tabla 10 Vida domestica	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	TOTAL		
		0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	3.6		
												(%) PORCENTAJE TOTAL OTRAS ÁREAS OCUPACIONALES (20 %)	14.6%	

Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

	DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-03-0030
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina.111-122 Teléfono 2196880 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratoriosaludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia	VERSIÓN 01
		PÁGINA 5 DE 6

6. PORCENTAJE TOTAL DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL			
Descripción	% Porcentaje	Estado de la Pérdida de Capacidad Laboral	
I Total Deficiencia	42.2%	Invalidez	
II Total Rol Laboral	30.0%		
III Total Otras Áreas Ocupacionales (Suma de totales de tablas 7, 8, 9, 10).	14.6%		
Total Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional	86.8%		
Fecha de estructuración de la PCLO o de Invalidez:	21 de febrero de 1990		
Requiere Curador	SI	NO	

7. CALIFICACIÓN DE ORIGEN		
Descripción	Indique con una "x"	Observación
EVENTO COMÚN	Enfermedad Accidente	X
EVENTO LABORAL	Accidente de Trabajo Enfermedad Laboral	

8. ELEMENTOS DE HECHO		
8.1 Informe de accidente de trabajo	8.7 Exámenes paraclínicos ¿Cuáles?	X
8.2 Historia Clínica	TAC, EEG	
8.3 Examen Físico	8.8 Exámenes ocupacionales	
8.4 Acta de levantamiento del cadáver	8.9 Concepto de salud ocupacional	
8.5 Certificado de difusión	8.10 Otros, ¿Cuáles?	
8.6 Análisis de puesto de trabajo	Valoración clínica periódica.	

9. ELEMENTOS DE DERECHO	
De acuerdo con el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 (Manual Único de Calificación de Invalidez en Colombia)	

SUSTENTACIÓN:

- El señor Luis Eduardo Paniagua Londoño falleció el 29 de noviembre de 2019. Por solicitud de la señora Josefina Paniagua de Cañas, expresada en derecho de petición fechada 14/09/2020, solicita valoración de pérdida de la capacidad laboral del señor Luis Eduardo.
- La señora Josefina expresa dificultades cognitivas y del aprendizaje del señor Luis Eduardo desde su niñez. En la documentación aportada no hay evidencia que soporte dicha alteración. Solo hay notas de la historia clínica a partir del año 1990, posterior a un Trauma Encéfalo Craneano (TEC), que, según los médicos tratantes, generó hemiplejía derecha (es decir parálisis de sus extremidades derechas) al parecer como consecuencia del trauma sufrido.
- Se puede afirmar que para el 21 de febrero de 1990 presentaba hemiparesia derecha y un EEG severamente anormal, por identificación delta cortical difusa permanente sin zonas de

Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

	DICTAMEN DE MERMA DE CAPACIDAD LABORAL FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-03-0030
	Calle 62 No.52-59, bloque 33, oficina 111-122 Teléfono 2196580 • Apartado: 1226 • Nit: 890.980.040-8 Correo electrónico: laboratoriosaludpublica@udea.edu.co Medellín, Colombia	VERSIÓN 01
		PÁGINA 6 DE 6

diferenciación. Es decir, estaba establecido el daño cerebral que explica sus signos clínicos. Por ello se define esa fecha como la fecha de estructuración de la invalidez.

- No se encontró registro de la dominancia del señor Luis Eduardo, por ello no se hizo el cálculo de la deficiencia teniendo en cuenta la dominancia, igualmente no hay definición de psiquiatría o neuropsicología de la severidad del retardo mental, algunos lo consideraban leve y otros evaluadores moderado. Se valora como leve por carecer de criterios específicos para definir severidad de la lesión como test neuropsicológico o cociente intelectual.
- Se valora una pérdida de la capacidad laboral del 86,8%, de origen común, estructurada el 21 de febrero de 1990, de acuerdo con la historia clínica.

FECHA DE ENTREGA DEL DICTAMEN	5 de octubre de 2020
-------------------------------	----------------------

Responsable de la calificación: Martha Lucia Escobar Pérez

Firma:



Médico(a) Especialista en Salud Ocupacional
Licencia de salud ocupacional: 53616 de la DSSA
Tarjeta profesional: 9568

Paciente: Luis Eduardo Paniagua Londoño. Cédula: 70.048.199
Responsable: Doctor(a) Martha Lucia Escobar Pérez.

Como puede observarse, esta experticia fue realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, luego del fallecimiento del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño, utilizando la historia clínica, por demás extensa y completa, del citado señor, la cual también se aportó al proceso (Fol.41 a 157 del PDF 3) resaltando la sala que la Facultad que realizó la experticia sí está facultada para emitir esta clase de dictámenes con miras a servir como prueba en el proceso judicial, tal como se desprende de lo indicado en el parágrafo 3º del artículo 4º del Decreto 1352 de 2013, como resaltó la a quo, y, adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 226 a 235 del Código General del Proceso, por lo que tampoco le asiste razón a la recurrente en el sentido de indicar que es jurídicamente inviable la experticia en comento; además, no es cierto, como lo afirma la apelante, que el dictamen se haya realizado con el manual establecido en el Decreto 917 de 1999, toda vez que en el mismo dictamen, en el numeral 9º, en los elementos de derecho, se indica claramente los siguiente: **“De acuerdo con el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 (Manual Único de Calificación de Invalidez en Colombia)”** Así mismo, como se observa a folios 3 a22 del PDF 16, ante requerimiento del Juzgado de conocimiento, La Facultad Nacional de


Salud Pública de la Universidad de Antioquia envió los documentos pertinentes a fin de cumplir con lo exigido en el artículo 226 del CGP, atinentes a la idoneidad de quien rinde la experticia.

En el dictamen bajo estudio, rendido el 5 de octubre de 2020 se concluyó que el señor Luís Eduardo Paniagua Londoño presenta una pérdida de capacidad laboral del 88,8% derivada de enfermedades de origen común, estructurada el 21 de febrero de 1990, de acuerdo con la historia clínica, indicándose en la sustentación lo siguiente: *“Se puede afirmar que para el 21 de febrero de 1990 presentaba hemiparesia derecha y un EEG severamente anormal, por lentificación delta cortical difusa permanente sin zonas de diferenciación. Es decir, estaba establecido el daño cerebral que explica sus signos clínicos. Por ello se define esa fecha como la fecha de estructuración de la invalidez.”* Y, como diagnósticos motivos de calificación se indicó: *“... HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA (Compromiso en la movilidad de extremidades superior e inferior derechas) ... OTROS TRASTORNOS MENTALES ESPECIFICADOS DEBIDOS A LESION y DISFUNCION CEREBRAL y A ENFERMEDAD FISICA ... TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE.”*

Ahora, una simple lectura de la historia clínica, y de lo consignado en el dictamen con fundamento en ella, permite colegir, como lo hizo la a quo, el claro deterioro de la salud de señor Luís Eduardo y su estado de invalidez desde la fecha de estructuración que se estableció en la experticia, en silla de ruedas desde entonces, necesitando de la ayuda de un tercero en su vida cotidiana, situación que no presentó mejoría desde esa fecha hasta el momento de su fallecimiento, por el contrario, empeoró.

Es por ello que este dictamen ofrece total credibilidad a la Sala sobre el estado de invalidez del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño para el momento del fallecimiento de su señora madre, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.


Adicional a ello, como destacó la falladora de primera instancia, a folio 63 del PDF12, obra el siguiente documento:

	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL ANTIOQUIA MEDELLIN COMUNICACION INTERNA
De <u>MEDICINA LABORAL</u>	Fecha <u>OCTUBRE 28 DE 1983</u>
A <u>PRESTACIONES ECONOMICAS</u>	Referencia _____

LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO, sufre retardo mental severo que lo convierte en INVALIDO.

Es hijo de la asegurada María Mercedes Londoño Taborda, afiliación 020186561

Atentamente,



pbcc

Dicho documento da cuenta que, efectivamente, para el ISS, para la fecha del mismo, octubre 28 de 1983, el señor Luis Eduardo Paniagua Londoño tenía para un retardo mental severo que, según la Oficina Medicina Laboral de dicho instituto, lo convertían en inválido.

Ahora, de cara al requisito de la dependencia económica del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño con relación a la causante, cabe resaltar que, ante la ausencia de una definición legal de la dependencia económica, determinó la necesidad de fijar su alcance por vía jurisprudencial; en este contexto, la jurisprudencia constitucional ha identificado un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente a partir de la valoración del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, lo que ha llevado a concluir que la dependencia no se desvirtúa por el hecho que se perciban ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando éstos no los conviertan en autosuficientes. Así ha quedado expuesto entre otras, en la sentencia C-056 de 2016, donde se coligió lo siguiente:

“Para esta Corporación la dependencia económica ha sido comprendida como: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.”

Visto lo anterior, resulta notorio que la dependencia económica, no significa necesariamente que el causante fuera el que aportaba absolutamente todos los recursos económicos para el beneficiario, pues basta con que se demuestre que el aporte económico que realizaba era significativo para el beneficiario, pues la norma de ninguna manera exige que el beneficiario demuestre que al no contar con el causante se encuentra en una situación de mendicidad o indigencia, basta solo con que el beneficiario demuestre que los aportes que realizaba el causante daban un apoyo para ostentar una vida digna, lo anterior lo estableció la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-6690 del 21 de mayo de 2014, con radicación 54.451 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, veamos:

“Adicionalmente la doctrina de la Corte ha señalado que para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia, toda vez que el ámbito de la Seguridad Social supera con solvencia el simple concepto de subsistencia y ubica en primerísimo lugar el carácter decoroso de una vida digna que continúe las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado.”

En conclusión, depender económicamente de alguien, supone un criterio de necesidad, un sometimiento o sujeción al auxilio recibido de tal manera útil e imprescindible que, de no obtenerlo, se pondría en peligro la subsistencia del subordinado al no poder sufragar los gastos diarios.

Y más recientemente en sentencia SL2992 de 2022, donde también se rememoran otras sentencias de la misma Corte, como las SL565 de 2019, y SL1704-2021, se recordó que el requisito de la dependencia económica se estructura a partir de aportes ciertos, regulares y periódicos de los padres hacia los hijos, además de significativos y proporcionalmente representativos, en perspectiva de los ingresos totales del familiar beneficiario de la pensión de sobreviviente, de modo que se establezca una verdadera relación de subordinación económica y, por tanto, se descarte una autosuficiencia económica a partir de otros ingresos.

“...En esa perspectiva, la dependencia económica es una condición material que no desaparece por la sola existencia de personas obligadas por ley a suministrar alimentos en razón del parentesco o del estado civil, distintas del causante, sino que en cada caso se debe verificar si las varias fuentes de ingresos -que pueden incluir lo que se

reciba por suministro de alimentos- hacen o no autosuficiente al potencial beneficiario de la pensión de sobrevivientes en relación con el afiliado o pensionado del que pretende derivar la prestación de sobrevivencia...”
(SL1704-2021)

En el sub examine, para acreditar esa dependencia económica del hijo inválido respecto de la causante, a instancias de la activa declararon los señores Luz Elena Restrepo Londoño, y William de Jesús Bedoya González.

La señora Restrepo Londoño, de 61 años de edad, sobrina de la causante, indicó que Luís Eduardo Paniagua Londoño, desde que nació, tenía una discapacidad mental; que aproximadamente 30 años atrás lo atropelló un carro, y quedó minusválido, discapacitado; que, además, no estaba en condiciones de trabajar o de velar por sí mismo y nunca trabajó, no generó ingresos económicos, como tampoco recibió subsidios. Que en vida lo cuidó su tía, Mercedes, quien era la persona asumía el pago de todas las obligaciones económicas necesarias para el sostenimiento de Luis Eduardo, primero con su trabajo y luego con la pensión; señala que Luís Eduardo vivía con su tía Mercedes en Belén San Bernardo. Señaló que, luego de la muerte de Doña Mercedes, su prima Josefina asumió el cuidado de Luís Eduardo Sobre el padre de éste, indicó que nunca dio nada, que él se murió pero que nunca le dio nada. Indica la testigo que ella visitaba casi a diario la casa de su tía Mercedes. Refiere, además, que era la señora Mercedes quien compraba la ropa de Luis Eduardo, pagaba los gastos de la casa, así como la comida de éste

El señor William Bedoya, de 86 años, indicó que vive en el barrio Belén San Bernardo desde hace aproximadamente 70 años; que conoció a la señora María Mercedes Londoño porque eran vecinos de hace muchos años, y era la mamá de Josefina, señalando que vivía a media cuadra. Refiere que conoció a los hijos de la señora María Mercedes, *“Una de ellas es Josefina Paniagua, el otro era un muchacho que era Daniel. En este momento no recuerdo bien el nombre de él, pero yo sé que era él, Josefina y ese muchacho”*. Al ilustrarlo sobre el nombre del muchacho, esto es, que era Luís Eduardo, indicó que él no caminaba, que salía a la calle pero sentado y así bajaba las escaleras. Al preguntársele sobre quien vivía con la señora María Mercedes en el tiempo que el testigo fue vecino de ella, contestó que con Josefina, y que el muchacho vía con la mamá de él; que cuando falleció la mamá, *“.. siguió Josefina sosteniendo*

y viendo por él.” Adujo que a Luis Eduardo lo cuidaba Josefina y, ante la pregunta sobre si conoció si doña Mercedes cuando vivía, cuidaba a Luis Eduardo, respondió “si claro; era ahí hijo de ella”; y sobre la persona que pagaba todos los gastos y todo lo que necesitaba Luis Eduardo cuando vivía la mamá, señaló: *“La señora, la mamá.”* Indicó no saber sobre los ingresos económicos de la señora María Mercedes, y al indagársele si la la señora Mercedes recibía alguna ayuda y alguna persona para poder sostener a Luis Eduardo, Indicó: *“Sí, de Josefina.”*

Manifestó que Luís Eduardo nunca trabajó, no ganaba dinero, porque era minusválido; que no sabe si tenía algún bien o si recibía a algún subsidio o alguna ayuda del Estado. Preciso que la ayuda que recibía Luís Eduardo de Josefina, era alimentación, lo bañaba, lo vestía; y ante la pregunta sobre si fue antes o después de morir Mercedes, contestó: *“Desde antes, Josefina le ayudaba a la mamá. Y después de muerta la mamá, entonces ya Josefina se hizo cargo todo el tiempo de él, hasta que falleció.”* Dijo no sabe quién compraba la ropa de Luís Eduardo, pero que se imagina que fue la mamá durante el tiempo que vivió, y que después Josefina era la que se encargó de todo eso. Afirmó que la casa donde éstos vivían era de propiedad de la mamá, agregando: *“Y después ya de Josefina, porque Josefina, a Josefina le dieron el segundo piso. La mamá le cedió en el segundo piso.”* Al solicitarle que indicara quién paga los gastos de la casa en la que vivía Luis Eduardo cuando estaba viva la mamá, respondió: *“En realidad, verdad, yo no sé quién pagaba eso. Yo sé que Josefina se hizo cargo de todo lo de la casa... cuando la mamá falleció.”* Y al insistirle sobre quien se hacía cargo antes del fallecimiento de la causante, respondió: ***“Josefina y la mamá, porque son dos pisos. Josefina está en el segundo y la mamá está en primer.”*** Y sobre quién costeara todo, mercaba, pagaba impuestos, y quién asumía los gastos de vivienda de Luis Eduardo cuando estaba viva doña Mercedes, respondió: *“Yo sé que Josefina siempre ha sido la que estaba encargada de toda la casa, ayudándole a la mamá y ella era la que pagaba todo el resto de todo.”* Refirió que él visitaba mucho la casa de doña Mercedes, porque el marido de Josefina ha sido muy amigo de él, desde que llegaron al barrio. He sido compañero y amigos. Entonces, yo he visitado la casa muchas veces

Se resalta de esta última declaración, del señor William, que la casa de doña Mercedes, tenía dos pisos; el primero, donde vivían doña Mercedes y su hijo Luís Eduardo, y el segundo, que ocupaba Josefina y su marido; también, que el testigo, pese a vivir por muchos años cerca de la casa de doña Mercedes, no conocía los ingresos que esta recibía, es decir, que recibía una pensión, lo que sí está probado en el proceso.

Ahora, la censura, apoyada en algunos apartes de esta declaración pretende demostrar que el señor Luís Eduardo no dependía económicamente de la causante, tomando solo algunos apartes de este testimonio, concretamente, cuando el señor William al responder la pregunta sobre quién era el que costaba los gastos del señor Luis Eduardo, indicó que quien pagaba todo era la señora Josefina, concluyendo que quien siempre estuvo al frente de su cuidado, de alimentación, vivienda y demás, sino también lo económico.

Sin embargo, olvida la recurrente que, en vida de la causante, esta tenía los ingresos de su pensión, vivía sola con su hijo Luís Eduardo, en el primer piso, y que la señora Josefina, quien tenía su propia familia, habitaba en el segundo piso de la casa que, se resalta, era de propiedad de la señora Mercedes; además, el señor William también dijo, al inicio de su declaración, que, en vida de doña Mercedes, ésta pagaba los gastos y todo lo que necesitara Luís Eduardo; incluso, en un aparte de la declaración, al insistirle sobre quien pagaba los gastos de la casa en la que vivía Luis Eduardo cuando estaba viva la mamá, indicó que, en realidad, no sabía quién pagaba eso y que lo que sabe es *que Josefina se hizo cargo de todo lo de la casa cuando la mamá falleció*

Por el contrario, la otra testigo, la señora Luz Elena Restrepo Londoño, sobrina de la causante, quien indudablemente tiene un conocimiento directo de los hechos que relata fue clara, sin ningún tipo de contradicción e inconsistencia, en señalar que la señora Mercedes era la persona que asumía el pago de todas las obligaciones económicas necesarias para el sostenimiento de Luis Eduardo, primero con su trabajo y luego con la pensión, que Luís Eduardo vivía con su tía Mercedes en Belén San Bernardo, y que, luego del fallecimiento de ésta, Josefina asumió el cuidado de Luís Eduardo. También indicó que doña Mercedes era quien compraba la ropa de Luis Eduardo, pagaba los gastos de la casa, así como la comida de éste.

Ahora, para la Colegiatura, las ayudas que pudo dar la señora Josefina a la señora Mercedes en el cuidado de Luís Eduardo, no solo económicamente sino también en los cuidados propios dada su minusvalía, son las propias de la solidaridad familiar por el vínculo entre ellos, y no desvirtúan la dependencia económica de Luís Eduardo con relación a su señora madre, la causante, como bien coligió la falladora de instancia, ayudas que por demás, parten de la circunstancia atinente a que la señora Josefina vivía en la propiedad de doña Mercedes, en el segundo piso, cerca de ellos, al punto de asumir el cuidado de su hermano Luís ante el fallecimiento de la causante.

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de la a quo en el sentido de DECLARAR que el señor LUIS EDUARDO PANIAGUA LONDOÑO ostentó la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su madre MARIA MERCEDES LONDOÑO.

Ahora, al señor Luis Eduardo Paniagua Londoño le asistía el derecho al disfrute de la sustitución pensional, a partir del falleció el 15 de noviembre de 2017, por lo que el retroactivo pensional debe liquidarse a partir de esa fecha y hasta el fallecimiento del citado señor, esto es, hasta el 19 de noviembre de 2019, en cuantía mínima y sobre 14 mesadas anuales (, de conformidad con la pensión de vejez que venía percibiendo la causante, retroactivo que Resolución No. 01811 del 15 de mayo de 1984 visible a Fol. 19 y 20 PDF 3) asciende a la suma de \$22.685.948, tal como acertadamente concluyó la a quo (liquidación visible en el expediente digital), sin que hubiera operado la prescripción de mesada alguna pues, como lo advirtió la falladora de instancia, conforme los diagnósticos que tuvo en vida Luis Eduardo Paniagua Londoño, entre ellos el retardo mental, operó en su favor la suspensión de la prescripción por ser una persona que tenía condición de discapacidad mental. Y como el señor Paniagua Londoño murió el 29 de noviembre del año 2019, y la demanda se presentó el 13 de febrero del año 2021, sus herederos no dejaron vencer el término prescriptivo establecido en los artículos 488 del CST y artículo 151 del CPL.

En este punto, como se indicó, los demandantes, hermanos del señor Luís Eduardo Paniagua Londoño tienen legitimación en la causa por activa, para reclamar el retroactivo pensional a que se hizo referencia, y para recibir el

mismo debidamente indexado, como dispuso la a quo, como herederos determinados, no para la masa herencial, teniendo en cuenta que, por auto del 19 de agosto de 2021, el juzgado de conocimiento, ante la ausencia de proceso sucesorio, dispuso la integración del contradictorio por activa con los herederos indeterminados del referido señor, ordenando su representación por medio de curador ad litem y su emplazamiento, por lo que se confirmará también este punto de la sentencia impugnada. Se resalta que la indexación ordenada es procedente, como mecanismo de actualización, para mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales que componen el retroactivo pensionales que recibirán los demandantes.

Cabe indicar, por ultimo que lo aducido por la censura en el sentido que, las condenas impuestas atentan directamente contra la sostenibilidad financiera del sistema, pues se está condenando a la entidad a reconocer unas sumas de dinero, retroactivo, la indexación y las costas, no es de recibo por cuanto las mismas tienen fundamento legal y de acuerdo con la prueba recaudada en el proceso.

Al no haber prosperado el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, se condena en costa de segunda instancia a dicha entidad, en favor de los demandantes, dentro de los cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de 1/2 salario mínimo mensual vigente para el año 2023, para cada uno de ellos.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación y consulta, de origen y fecha conocidos, en atención consideraciones vertidas en esta sentencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, a cargo de COLPENSIONES y en favor de los demandantes, dentro de las cuales se fija, como agencias en

derecho, la suma de 1/2 salario mínimo mensual vigente para el año 2023, para cada uno de ellos.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA